



Dialéctica del conflicto armado en el departamento de Nariño, Colombia en tiempos de paz, lecciones para la construcción de una Paz Histórica

Dialectic of the armed conflict in the department of Nariño, Colombia in times of peace, lessons for the construction of a Historic Peace

Carlos Lasso Urbano

Universidad Mariana, Colombia

calasso@umariana.edu.co

<https://orcid.org/0000-0001-5407-1953>

Paris A Cabello-Tijerina

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

paris.cabellotjr@uanl.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-0191-2488>

Recibido: 23 de marzo de 2022 / Aceptado: 20 de abril de 2022 / Publicado: 28 de abril de 2022

<https://doi.org/10.17081/just.27.41.5757>

Resumen

Objetivo: comprender la forma en que se presenta el conflicto armado en el departamento de Nariño luego de cinco años de la firma final del Acuerdo de Paz y a partir de ello integrar aspectos que aporten a la construcción de la paz histórica. Método: la investigación se desarrolló desde el paradigma mixto, por ende, se llevó a cabo la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 11 personas entre víctimas del conflicto armado, un firmante del Acuerdo de Paz, defensores de Derechos Humanos, también de una encuesta escala de Likert aplicada a una muestra de 402 personas, mayores de 18 de edad, habitantes de las 13 subregiones que integran el departamento de Nariño. Resultados: pese a la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano el conflicto armado sigue estando latente en el departamento de Nariño, para construir una paz real e histórica se requiere de la presencia integral del Estado en los territorios, garantía de derechos sociales, la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, la justicia social y la dignidad humana. Conclusiones: (i) Para dar fin al conflicto armado en Colombia se necesita dar respuesta a las causas de la guerra; (ii) el concepto de paz debe construirse desde las percepciones de los distintos sectores sociales, no puede ser un concepto impuesto; (iii) el conflicto armado en Nariño ha provocado afectaciones sociales, políticas, económicas, culturales y también psicosociales.

Palabras claves: Conflicto armado, guerra, paz, violencia, Paz Histórica.

Abstract

Objective: the objective of the article is to understand the way in which the armed conflict is presented in the department of Nariño five years after the final signing of the Peace Agreement and from this to integrate aspects that contribute to the construction of historical peace. Method: the research was developed from the mixed paradigm, therefore, the application of semi-structured interviews was carried out to 11 people among victims of the armed conflict, a signatory of the Peace Agreement, human rights defenders, also of a Likert scale survey applied to a sample of 402 people, over 18 of age, inhabitants of the 13 subregions that make up the department of Nariño. Results: despite the signing of the Peace Agreement between the FARC-EP and the Colombian State, the armed conflict continues to be latent in the department of Nariño, to build a real and historic peace requires the integral presence of the State in the territories, guarantee of social rights, the active participation of citizens in decision-making, social justice and human dignity. Conclusions: (!) To end the armed conflict in Colombia, it is necessary to respond to the causes of the war; (!) the concept of peace must be constructed from the perceptions of the different social sectors, it cannot be an imposed concept; (ii) the armed conflict in Nariño has caused social, political, economic, cultural and psychosocial affectations.

Keywords: Armed conflict, war, peace, violence, Historical Peace.

I. Introducción

A pocos meses luego de conmemorarse cinco años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y las FARC-EP en ceremonia llevada a cabo el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, el conflicto armado a través de sus múltiples expresiones continúa siendo el principal protagonista en los territorios. Si bien es cierto, una vez se firma el tratado de paz se presenta una disminución temporal de la violencia, su recrudecimiento comenzará a intensificarse al poco tiempo a lo largo y ancho del país, con mayor intensidad en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Sucre, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño, donde el aumento de grupos armados, su dominio territorial, el fortalecimiento del paramilitarismo, desplazamiento forzado, las masacres, asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que de los firmantes de la paz, entre otros aspectos, se han convertido en una constante sin que desde el gobierno nacional se adopten las medidas necesarias para enfrentar este tipo de situaciones tan críticas.

Por otro lado, las cifras de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados de manera sistemática desde la firma del Acuerdo de Paz son alarmantes. Según el informe 5 años del Acuerdo de Paz: balance en cifras de la violencia en los territorios presentado por el Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ (2021), en Colombia entre el 24 de noviembre de 2016 y el 23 de noviembre de 2021, fueron asesinados 1270 líderes y defensores de Derechos Humanos, de los cuales, 872 asesinatos se presentaron durante el gobierno de Iván Duque Márquez, siendo el 2020 el año con mayor número de asesinatos con 310 casos. Nariño aparece como el tercer departamento que más registra homicidios de estas personas con 126 víctimas, superado simplemente por los departamentos del Cauca con 300 casos y Antioquia con 164 casos respectivamente; del total de asesinados, 886 correspondían a integrantes de organizaciones campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones ambientalistas,

mineras y comunales¹; en relación con los firmantes del Acuerdo de Paz, el informe revelado por INDEPAZ, señala que en el lapso de tiempo 24 de noviembre de 2016 y el 03 de noviembre de 2021, 299 firmantes del Acuerdo fueron asesinados. En Nariño se reportan 36 casos, ubicándose en segundo lugar por debajo del departamento del Cauca con 53 casos.

Con respecto a las masacres, para el 2020 se registraron un total de 91 en Colombia que cobraron la vida de 381 víctimas, los tres departamentos con mayor número de masacres fueron: Antioquia con 21, Cauca con 14, y Nariño con 9 masacres. Ahora bien, entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2021, el Informe de Masacres en Colombia presentado por INDEPAZ (2021) revela que ocurrieron hasta la fecha señalada 90 masacres, dejando como saldo 320 víctimas, 14 de estas masacres se reportaron en el departamento del Cauca, 14 en Antioquia, 11 en el Valle del Cauca, 9 en Nariño, siendo las regiones con el número más alto de las mismas².

En esa misma línea, en lo que refiere a los puntos que integran el Acuerdo de Paz son más los incumplimientos que los avances que se tienen, en especial por parte del ente gubernamental que según Estrada (2021) se ha encargado de llevar a cabo una simplificación grotesca del Acuerdo Final, reduciéndolo nada más a la política de Desmovilización-Desarme-Reintegración. Aún las comunidades siguen a la espera de que la paz trascienda más allá de las letras plasmadas en el texto final, se exprese en condiciones objetivas, es decir, se traduzca en políticas sociales, reformas institucionales, presencia integral del Estado en los territorios, en oportunidades reales para las poblaciones, la defensa y el respeto de los Derechos Humanos, etc., pareciese que la paz en Colombia nada más se quedó en la retórica.

En efecto, el Instituto Kroc (2021) en el marco de su informe respecto de los cinco años frente a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia da a conocer su preocupación con relación a aspectos como la ausencia de garantías de seguridad, viéndose reflejado en el sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo; asimismo, se hace énfasis en los pocos avances que se tienen frente al punto 2, correspondiente a la participación política, pese a que su puesta en práctica requiere de un presupuesto no tan alto. En ese sentido, según revela el informe, de las 578 disposiciones del Acuerdo Final se habían implementado 162 completamente hasta finales del 2020, es decir el 30% del total, mientras que 104 de dichas disposiciones, correspondientes al 18% estaban en un nivel intermedio, 202 disposiciones se encontraban en estado mínimo, lo que significa que el 35% solamente iniciaron. Finalmente, las otras 110 disposiciones restantes, correspondientes al 19% se encontraban sin dar inicio con su implementación. Lo anterior permite evidenciar que los avances frente al tratado de paz son muy ínfimos, si a eso se le suma, que varias de las disposiciones han sufrido modificaciones desde el gobierno de Iván Duque que sin duda afectan mucho más la búsqueda de la paz estable y duradera.

Nariño se caracteriza por ser uno de los departamentos con mayores índices de violencia en tiempos de paz, siendo el resultado de aspectos como el incumplimiento del acuerdo, la no presencia integral del Estado en los territorios, la existencia cada vez más extensiva de grupos armados, cultivos ilícitos, entre otros aspectos. Con relación a lo mencionado, la fundación Desarrollo y Paz FUNDEPAZ (2020) en el informe denominado “Situación de los Derechos Humanos y el DIH en Nariño Informe Anual 2020” revela que para finales de ese año en el departamento de Nariño se tenía la presencia de 15 grupos armados ilegales que se ubican principalmente en regiones como: Costa Pacífica Nariñense: en los municipios de Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Tumaco, Roberto Payán, Barbacoas, Magüí Payán, Santa Bárbara, Ricaurte y Mallama; en la cordillera y región Norte, límites con el departamento del Cauca, ese encuentran asentados en los municipios de: Samaniego, Cumbitara, Leyva, El Rosario, Policarpa; por último, se encuentran en el sur del departamento, especialmente en el municipio de Cumbal, frontera con Ecuador³. Lo anterior ha acelerado el recluta-

1 Los registros expuestos a través del informe de INDEPAZ se encuentran disponibles en: <http://www.indepaz.org.co/5-anos-del-acuerdo-de-paz-balance-en-cifras-de-la-violencia-en-los-territorios/>.

2 El informe relacionado con las masacres ocurridas en los años 2020 y 2021 puede consultarse en: <http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>.

3 Para profundizar en los datos revelados, se recomienda consultar el Informe Anual 2020 de FUNDEPAZ disponible en: https://www.fundepaz.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe_Anual_2020_DDHH_Narino.pdf.

miento forzado de menores por parte de dichos grupos armados ilegales, máxime en tiempos de pandemia, especialmente en los municipios de las subregiones Pacífico Sur, Los Abades, Pie de Monte Costero, Cordillera.

Ahora bien, de acuerdo con FUNDEPAZ (2020) los grupos armados ilegales con presencia en el departamento de Nariño son los siguientes: Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) entre estos se encuentran El Nuevo Grupo, La Empresa, Gente del Orden y Los Negritos; Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) en los que se ubican las disidencias de las FARC, entre ellos, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Bloque Alfonso Cano, el frente Oliver Sinistera, Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, Columna Móvil Franco Benavides, Frente Carlos Patiño, Frente Primero, Frente Stiven González y el Frente 30; Grupos Armados Organizados (GAO), acá están el Clan del Golfo (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nariño es un departamento estratégico para los grupos armados ilegales, tanto por su ubicación geográfica, no solo a nivel nacional, sino también internacional, siendo un territorio muy apetecido para el tráfico de armas y drogas, por el amplio número de hectáreas de cultivos de uso ilícito que ahí se cultivan, por la minería ilegal y porque ha sido históricamente un territorio marginal, sumergido en el abandono estatal lo que ha profundizado los niveles de pobreza y desigualdad entre sus pobladores. Las disputas territoriales entre los grupos armados por el control de las rutas y las economías ilegales, ha incrementado los niveles de violencia, desplazamiento y múltiples manifestaciones del conflicto armado, sin que desde el Estado se evidencie ningún tipo de voluntad para contener el fortalecimiento de dichos grupos en la zona, para frenar la guerra, mucho menos para llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz (Salas et al., 2018).

Entonces hay que preguntarse ¿de qué tipo de paz se está hablando? ¿qué es la paz? ¿cómo construir la paz en una sociedad tan conflictiva como la que se tiene en Colombia? ¿cómo construir la paz en el departamento de Nariño en medio del abandono estatal y del fortalecimiento de los grupos armados ilegales? Son algunos de los interrogantes a los que pretende aportar desde el presente artículo. También se busca visibilizar la compleja situación que viven las comunidades en sus territorios como resultado de la agudización del conflicto armado posterior a los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, de igual modo, se busca aportar a la discusión del por qué es necesario el pensarse como sociedad colombiana la construcción de una Paz Histórica, una paz que garantice la transformación de los problemas estructurales, ese tipo de paz que se constituye en algo tan necesario, parafraseando a Norbert Elías (1981) para los sometidos, los explotados, los débiles, esos que viven directamente las secuelas de la guerra y de la violencia estructural.

Para ello se presentan parte de los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos de índole cualitativo y cuantitativo en el proceso de investigación adelantado durante la construcción de la tesis del doctorado para optar al título de doctor en Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, resultados que posibilitaron reflexionar con mayor vehemencia frente a la necesidad de trascender de la paz formal a la paz real, no solo en Nariño, sino también en el país.

II. Método

La investigación se desarrolló desde el paradigma mixto, para ello se llevó a cabo la aplicación de entrevistas semiestructuradas y encuestas. El cuestionario se elaboró a través de una matriz de operacionalización, para más adelante ser montado por medio de un formulario de Google Forms el cual fue compartido mediante redes sociales y correos electrónicos especialmente, éste se orientó a consultar respecto a lo concepción que se tiene frente a la paz, cuenta con 21 preguntas, de estas, 7 son demográficas y 14 se asocian con las diferentes variables presentes en los objetivos planteados en el marco de la investigación, adicionalmente señalar que las escalas de mediación que se utilizaron en el marco del cuestionario son: nominal y ordinal, entre las variables que se tuvo en cuenta están las siguientes: información personal (Género, edad, grado de escolaridad, estrato socioeconómico, zona de residencia), conflicto (afectaciones del conflicto, causas del conflicto armado), definición de la paz (concepción frente a la paz, paz estable y duradera), acuerdo de paz (participación, implementación, problemas estructura-

les del conflicto armado); cabe destacar que los datos obtenidos fueron analizados a través del SPSS, que a la vez mediante el Alfa de Cronbach arrojó una fiabilidad del instrumento del 0,8, tal como se logra observar en la siguiente tabla.

TABLA 1. ALFA DE CRONBACH

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,787	30

Fuente: elaboración propia

Por su parte, en lo que respecta a la información cualitativa de la investigación, es menester señalar que la construcción del instrumento de entrevista semiestructurada se hizo por medio de la matriz de categorización, en aras de garantizar coherencia metodológica y de ese modo dar respuesta a los objetivos de la investigación; para la definición de los sujetos entrevistados se tuvo en cuenta unos criterios de selección entre los que se encuentran: un firmante del Acuerdo de Paz, una víctima de la extinta guerrilla de las FARC-EP, una víctima de los paramilitares, una víctima de las fuerzas militares, un representante de la institucionalidad (Asamblea Departamental de Nariño), dos personas defensoras de Derechos Humanos, una persona de un observatorio de paz y conflicto, un líder del pueblo Awá, coordinador Casa de Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, una persona experta en el tema (docente Universidad Mariana), en total fueron 11 entrevistas las que se llevaron a cabo, se hicieron de forma presencial y la información recopilada se analizó a través de [Altas.ti](#); cabe destacar que con el fin de garantizar el principio de confidencialidad de los informantes, se hace uso de códigos para de ese modo brindar la protección de los mismos.

III. Resultados

A partir de la aplicación de la encuesta con escala Likert a 403 personas, habitantes de las 13 subregiones que integran el departamento de Nariño, la información más relevante en términos sociodemográficos que se logró recopilar es la siguiente: el 67,25% de quienes diligenciaron el instrumento son del género femenino, mientras que el 32,51% de género masculino; con respecto a la edad de los encuestados se tiene que el 64,52% se encuentra entre los 18 y 27 años, seguido de quienes se ubican entre los 28 y 37 años con el 21,34%, es decir que, la mayor parte de quienes participaron del diligenciamiento de la encuesta son jóvenes y también menores de 40 años de edad; por su parte en lo que refiere al grado de escolaridad, según los datos obtenidos el 45% cuentan con o vienen desarrollando su formación profesional, el 22% tiene formación secundaria, mientras que el 3,23 tiene formación primaria, y el 18,86 de los encuestados cuenta con formación técnica o tecnológica.

Asimismo, frente a la zona de residencia en la que habitan, se evidencia que el 63,03% residen en la zona urbana, mientras que el 36,97 viven en zona rural del departamento de Nariño; por su parte, entorno al estrato socioeconómico en el que se ubica su vivienda, los datos más relevantes señalan que el 62,76% son de estrato 1, el 23,06% corresponden al estrato 2, mientras que el 12,16% se encuentran en el estrato 3, lo que permite evidenciar que la mayoría de quienes diligenciaron el instrumento cuantitativo son de los estratos más bajos.

Nariño se ha caracterizado por el abandono estatal al que se ha visto sometida históricamente, sin que exista ni un solo gobierno nacional que atienda los reclamos colectivos y la situación tan crítica a la que han enfrentado permanentemente sus pobladores. De acuerdo con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presentado por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a través del Censo nacional de población y vivienda del 2018 (2021), se puede evidenciar los altos niveles de pobreza y miseria en que se encuentran los hogares y habitantes del departamento; el porcentaje para esta región del país con NBI es del 21,98%, siendo bastante significativo, incluso, ubicándose por encima de las cifras

de la población nacional que fue del 14,28%⁴, no obstante, si se revisa particularmente en las subregiones donde ha predominado el conflicto armado se identifica que los datos presentan incrementos bastante considerables.

Afectaciones del conflicto

Con relación a la pregunta de si ha sido víctima del conflicto armado, el 55,58% de los participantes de la encuesta manifiestan que no han sido víctimas, por su parte, el 44,42% alude que sí ha sido víctima del conflicto armado, las cifras evidencian lo que acontece en el escenario real, puesto que en el departamento de Nariño un número considerable de sus habitantes son víctimas del conflicto, se estima que son alrededor del 33% del total de la población (Unidad de Víctimas, 2022).

Con respecto a la pregunta de si las personas que han sido víctimas del conflicto sociopolítico y armado en Colombia son quienes desean la paz, del total de los encuestados el 47,15%, se muestran totalmente de acuerdo con ello, el 35,24 menciona que está de acuerdo, por su parte, el 11,41% dijo encontrarse en desacuerdo, para el 3,97% de los encuestados le es indiferente, finalmente, el 2,23% señala que se encuentra totalmente en desacuerdo.

Del mismo modo, a través de la aplicación de la entrevista semiestructurada se logra identificar que entre las afectaciones del conflicto armado en el departamento de Nariño y en Colombia se encuentran: la ruptura del tejido social (ESE_AC1_H, ESE_AC5_H, ESE_AC6_H, ESE_AC7_H, ESE_AC8_M, ESE_AC9_M), el desplazamiento (ESE_AC1_H, ESE_AC5_H), los asesinatos (ESE_AC1_H, ESE_AC5_H); ya específicamente para la región nariñense están el desarraigo cultural (ESE_AC1_H, ESE_AC9_M), la estigmatización del territorio (ESE_AC2_M, ESE_AC4_H), las víctimas del conflicto armado (ESE_AC2_M, ESE_AC11_M), la cultura de la violencia (ESE_AC2_M, ESE_AC3_H, ESE_AC7_H, ESE_AC11_M), los impactos psicológicos (ESE_AC3_H), la violencia contra la mujer (ESE_AC3_H), y la falta de desarrollo del territorio (ESE_AC4_H). Es decir que el conflicto armado más allá de los impactos objetivos, ha quebrantado aspectos subjetivos, emocionales de quienes habitan los territorios donde éste se ha presentado.

Fin del conflicto

En lo que concierne a la pregunta de si con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano se puso fin al conflicto armado en el país, el 51,36% están en desacuerdo, el 31,02% de los encuestados afirma encontrarse totalmente en desacuerdo, para el 7,44% le es indiferente, mientras tanto, el 6,95% menciona que está de acuerdo, y el 3,23 de la población señala estar totalmente de acuerdo; por otra parte, frente a la pregunta de si con la firma del Acuerdo de Paz se dio fin al conflicto armado en el departamento de Nariño, el 52,61% de los encuestados afirman que se encuentran en desacuerdo, mientras que el 29,53% alude que está totalmente en desacuerdo, a su vez, para el 8,93% le es indiferente, el 6,20% se muestra en desacuerdo, por último, el 2,73% de las personas encuestadas considera encontrarse totalmente en desacuerdo.

Por su parte, para alcanzar el fin del conflicto, asimismo, la paz real en Colombia y en el departamento de Nariño, de acuerdo con las personas entrevistadas se requieren los siguientes elementos: voluntad política de las clases en el poder (ESE_AC1_H), acceso y garantía de derechos (ESE_AC1_H), voluntad política de toda la sociedad (ESE_AC2_M), cambios estructurales (ESE_AC3_H, ESE_AC5_H, ESE_AC8_M, ESE_AC11_M), participación activa de la sociedad en los espacios de toma de decisiones (ESE_AC3_H) y educando para la paz (ESE_AC6_H).

Causas del conflicto armado

Al consultarle a las personas participantes de la encuesta respecto a si una de las principales causas del conflicto armado tiene que ver con el abandono estatal, en concordancia con lo señalado por parte de los encuestados se evidencia que el 54,59% está de acuerdo, el 31,76% se encuentra

4 Para mayor claridad con respecto a los datos expuestos, se puede consultar el informe en el siguiente enlace: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

totalmente de acuerdo, por su parte, al 6.70% del total encuestado le es indiferente, mientras que el 5,71% se muestra en desacuerdo, adicionalmente, el 1,24% está totalmente en desacuerdo en que el abandono del Estado sea la causa más relevante del conflicto en esta región del país.

Por otro lado, mediante las entrevistas semiestructuradas se logró identificar que para los informantes las causas del conflicto armado que se tienen son: el despojo y la disputa por la tierra (ESE_AC1_H, ESE_AC8_M, ESE_AC11_M), la corrupción estatal (ESE_AC1_H, ESE_AC9_M), el abandono estatal (ESE_AC2_M, ESE_AC3_H, ESE_AC4_H, ESE_AC5_H, ESE_AC7_H, ESE_AC8_M), la falta de acceso a derechos (ESE_AC7_H), el narcotráfico (ESE_AC3_H, ESE_AC10_M).

El departamento de Nariño es una de las regiones del país donde el tema del narcotráfico ha presentado cifras de gran magnitud en lo que refiere a su crecimiento, siendo actualmente el segundo departamento, después de Norte de Santander con mayor número de hectáreas dedicadas a la producción de coca según los datos relevados en el Informe de Mundial sobre las drogas 2020 por parte del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas (2020). Ahora bien, al consultarles a los encuestados si la presencia de los cultivos ilícitos es una de las causas principales del conflicto armado en el departamento de Nariño, los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta evidencian que el 56,33% de los participantes está de acuerdo, el 24,07% se muestra totalmente de acuerdo, por su parte, el 10,92% afirma estar en desacuerdo, al 7,20% le es indiferente la pregunta, por último, el 1,49% afirma encontrarse totalmente en desacuerdo.

Por otra parte, la presencia de grupos armado en la región nariñense se constituye en un aspecto que se comienza a tener mayor amplitud a finales de la década de los noventa del siglo XX, sin embargo, pese a la firma final del Acuerdo de Paz la presencia de los mismos se ha intensificado notoriamente. En efecto, se estima que para el 2020 en el departamento se tenían 15 grupos armados de distinta índole (FUNDEPAZ, 2020) con lo que se ha profundizado los niveles de violencia, y un sin número de hechos victimizantes dejando como principales afectadas a las comunidades que habitan en los territorios donde la presencia de estos grupos armados es una constante; en ese orden de ideas, en torno a la pregunta de si una de las causas del conflicto armado en Nariño es la presencia de los grupos armados en el territorio, los datos obtenidos revelan que el 55,09% de los participantes de la encuesta está de acuerdo con ello, el 34,24% afirma encontrarse totalmente de acuerdo, por su parte, para el 4,96 le es indiferente, el 4,96% se muestra en desacuerdo, mientras que el 0,74% respondió que está totalmente en desacuerdo.

Otro de los aspectos que ha generado gran debate no solo en el país, sino también en el departamento de Nariño, tiene que ver con la disputa por la tierra, comenzó a presentarse en el contexto nacional desde la segunda década del siglo XX, donde el latifundio, la acumulación y el despojo se expande por distintas regiones del ámbito nacional (Pécaut, 2012), ahora bien, con relación a la pregunta de si la lucha por la tierra ha sido una de las causas del conflicto armado en el departamento de Nariño, el 46.90% está de acuerdo, el 18,61% considera que está totalmente de acuerdo, por otro lado, el 16,38% se muestra en desacuerdo, al 16,13% de los encuestados les es indiferente, por último, el 1,99% se muestra totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.

Concepción frente a la paz

La concepción que se tiene frente a la paz en Colombia, es un aspecto que aparece como ausente en el marco de la sociedad, puesto que en ningún momento a la hora de pensarse la paz tal como se presentó en el Acuerdo de la Habana se ha tenido en cuenta la forma en que se comprende y se piensa la paz desde las diversas perspectivas políticas e ideológicas, grupos poblacionales, sectores sociales, entre otros. En esa medida, varias de las preguntas que acompañaron el instrumento cualitativo (entrevista semiestructurada) y el instrumento cuantitativo (encuesta) se orientaron en ese sentido. Con respecto al cuestionario aplicado a las 403 personas al momento de consultarles de si la paz tiene que ver con la ausencia de violencia, los resultados obtenidos evidencian que el 50,12% está de acuerdo con ello, el 28,29% se muestra totalmente de acuerdo, asimismo, el 12,41% está en desacuerdo, al 6,45% de la población encuestada le es indiferente, finalmente, el 2,73% afirma que está totalmente en desacuerdo.

Por otro lado, también se les consultó a los encuestados de si la paz tiene que ver con la garantía de derechos por parte del Estado, ante lo cual el 51,36% señala estar de acuerdo, el 42,43% se encuentra totalmente de acuerdo, para el 3,57% le es indiferente la pregunta, el 1,49% se muestra en desacuerdo, mientras que el 1,24% afirma estar totalmente en desacuerdo; de igual forma, al momento de consultarles de si la paz se encuentra asociada con la justicia social, del total de los participantes en el diligenciamiento de la encuesta, el 47,39% señala que está de acuerdo, el 46,90% afirma que se encuentra totalmente de acuerdo, a su vez, al 3,23% de las personas encuestadas les es indiferente, por su parte, el 1,99% señala estar en desacuerdo, y el 0,50% está totalmente en desacuerdo; en cuanto a la pregunta de si la paz tiene que ver con la dignidad humana, los resultados dan cuenta que el 54,09% respondió que se encuentra totalmente de acuerdo, el 41,44% se muestra de acuerdo, por otra parte, al 2,73% de los participantes de la encuesta le es indiferente, el 1,24% está en desacuerdo, finalmente, el 0,50% alude que se encuentra totalmente en desacuerdo.

Asimismo, se les consultó a los encuestados si la paz tiene que ver con que los ciudadanos hagan parte activa de la toma de decisiones, con relación a esta pregunta el 47,64% de quienes diligenciaron la encuesta afirman que están de acuerdo, el 47,39% manifiesta que se encuentra totalmente de acuerdo, de igual modo, el 3,97% se muestra indiferente, el 0,50% está en desacuerdo, y un 0,50% señala que está totalmente en desacuerdo; de otro lado, respecto a la pregunta de si la paz tiene que ver con la presencia integral del Estado en los territorios los datos obtenidos permiten identificar que el 49,38% está de acuerdo, el 41,19% expresa que se encuentra totalmente de acuerdo, para el 6,95% de las personas encuestadas le es indiferente la pregunta, el 2,23% señala que está en desacuerdo, mientras que el 0,25% está totalmente en desacuerdo.

Mientras tanto, para las personas entrevistadas señalan que la paz tiene que ver con: el ejercicio y garantía de derechos (ESE_AC1_H, ESE_AC2_M, ESE_AC9_M, ESE_AC11_M), gestión de los conflictos (ESE_AC3_H, ESE_AC5_H), respuesta a los problemas estructurales (ESE_AC5_H), convivencia (ESE_AC7_H).

IV. Discusiones

La guerra continúa siendo tema de análisis y reflexión en el marco de la contemporaneidad, plantearse la búsqueda y la materialización de la paz sin discutir frente a esta es incurrir en un error garrafal, se caracteriza por ser un desafío que tiene lugar en los distintos ámbitos de la sociedad. Por lo general se encuentra asociada a un objetivo político, es decir, a través de la misma se pretende lograr los propósitos que se han establecido desde un sector político (Clausewitz, 2002), adicionalmente, el autor señala que la guerra es considerada como un acto de violencia, puesto que se orienta hacia el aniquilamiento del enemigo en aras de lograr la victoria, eso implica, además, conllevar a que el oponente acepte la voluntad del triunfador.

A decir verdad, la guerra es un fenómeno social que siempre dejará impactos significativos, de diversa índole, no solo entre sus protagonistas, sino también en la sociedad en general, entre dichos impactos se encuentran los sociales, psicológicos, económicos, culturales, entre otros. En efecto, en la contemporaneidad, la guerra va a presentar transformaciones, sin embargo, su deshumanización y crueldad seguirán en ascenso, al igual que continuará siendo utilizada como estrategia de poder para la imposición de un orden social, para lo cual la violencia es la forma mediante la que se impone la voluntad política (Nievas 2009).

En Colombia, la guerra puede catalogarse como un fenómeno que aún continúa vigente, pese a la firma alcanzada del Acuerdo de Paz a finales del 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano, dado que las causas estructurales que incidieron en su configuración en ningún momento fueron discutidas, mucho menos han logrado enfrentarse, constituyéndose de esa manera en aspectos históricos de su génesis, de acuerdo con Franco (2001) es menester estudiar las causas de la guerra, de los enfrentamientos humanos, conocerlos de forma profunda para así lograr trascender hacia aquella finalidad de alcanzar la paz.

Los relatos, historias de vida, las respuestas obtenidas con la aplicación de los instrumentos de la investigación permiten entender que el conflicto armado aún sigue ahí en los territorios, con la diferencia que ahora se expresa con mayores niveles de terror, daños, de violación de

derechos humanos, si bien es cierto como señalan Jiménez y Zuluaga (2021) se puso final a la guerra desarrollada con el grupo insurgente de más alta capacidad militar de Latinoamérica como es el caso de la extinta guerrilla de las FARC, el espacio territorial dejado por grupo guerrillero no fue ocupado por el Estado, sino por diversos actores armados ilegales, lo que explica la agudización de la violencia en el país, en especial en las regiones donde ha sido una constante la ausencia institucional del Estado, entre ellas, el departamento de Nariño.

En suma, no es posible entender las causas del conflicto armado sin examinarse la articulación que ha tenido la violencia política con el problema de la distribución y la tenencia de la tierra (Molano, 2015), la expropiación de la misma hacia el pequeño campesino dio inicio a la constitución de los latifundios ganaderos, a las grandes haciendas cafeteras que sin lugar a dudas dejará como resultado el surgimiento de diversos estallidos sociales devenidos de quienes se rehusaban a perder sus tierras, es decir, aquellos campesinos expulsados de forma violenta (Giraldo, 2015).

Los conflictos agrarios tendrán lugar con mayor intensidad a partir de la segunda década del siglo XX cuando el café comienza a incrementar su precio, debido a la alta demanda en el mercado internacional, pero de igual forma, producto de la apropiación de los latifundios, la constante expulsión de campesinos, arrendatarios y colonos por parte de terratenientes, hacendados y empresarios rurales con el apoyo de los gobiernos de turno (Pécaut, 2012). En efecto, el conflicto por la tierra va más allá del acceso a la propiedad, se encuentra también asociado con los niveles de violencia provocada por parte de aquellos que se habían beneficiado con el despojo; así pues, el sector rural se convertirá en un escenario de batalla entre bandoleros al servicio de quienes buscaban hacerse de forma violenta con la propiedad de la tierra y de aquellos campesinos y parcelados que se vieron obligados a tomar las armas para poder resistir.

En ese sentido, la disputa por la tierra se constituye en una de las principales causas del conflicto armado en Colombia, a la cual se articularon otros aspectos como son el abandono del Estado en los territorios, la falta de garantías para el desarrollo de la oposición política a los partidos tradicionales, la limitada democracia, puesta al servicio de los dueños del poder político y económico. Con base a lo mencionado, en los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos cualitativo y cuantitativo se observa que los participantes identifican que para alcanzar la paz es menester brindar respuestas reales a los problemas históricos del conflicto armado. Para el caso del departamento de Nariño, seguirá siendo un escenario de conflicto social y político, de violencia y disputa territorial armada, mientras la expansión de las economías ilegales como es el caso de los cultivos ilícitos y la minería, mientras la ausencia del Estado y de sus instituciones continúen su dinámica (Salas et al., 2018).

Por otro lado, examinar el concepto de paz de forma crítica en la sociedad colombiana, caracterizada por sus múltiples expresiones, contradicciones, complejidad e historicidad, fundada en el marco de unas relaciones sociales de dominación, pareciese que fuera una condición inaplazable, máxime cuando se quiere vislumbrar su carácter real y concreto, en un conflicto armado que antes que reducirse o desaparecer como resultado de la firma del Acuerdo de Paz a finales del año 2016, ha alcanzado niveles imaginables de degradación que ni siquiera desde la lógica de la política resulta fácil de lograr explicar.

El error quizás más marcado, en lo que como pueblo colombiano se concibe como concepto de paz, ha sido extraerlo del entramado de intereses, de las relaciones de poder y de las condiciones políticas en que se encuentra presente, no obstante, definir la paz como sociedad colombiana implica construirla y discutirla, partiendo claro está de las necesidades específicas del país.

Para lograr la paz estable y duradera en Colombia, es menester antes que nada que se presenten transformaciones estructurales, enfrentado tanto las causas como los impactos del conflicto armado, promoviendo y posibilitando para su construcción la participación activa y protagónica de los diferentes sectores sociales y políticos en la toma de decisiones, sin reducir la paz claro está, a un estado emocional y/o subjetivo. De ahí que se plantee la necesidad de pensarse en una Paz Histórica, es decir, una paz orientada a dar respuestas a los problemas históricos que han sido el detonante de la guerra en el país por más de sesenta años; una paz que enfrente las desigualdades e injusticias sociales, que parta desde “el análisis de las causas, estructuras y dinámicas que generan conflictos” (Muñoz y López, 2004, p. 51), para promover cambios socio-

políticos, económicos y culturales de esta sociedad injusta. En ese sentido, es indispensable que la paz se comprenda como una construcción social e histórica a través de la cual se promuevan valores como la solidaridad, la cooperación, la hermandad, entre otros, garantizando el acceso a derechos a todos los individuos, es ahí donde la praxis de la Paz Histórica se debe convertir en una constante, construyéndose en el marco de los procesos históricos que encaminan los hombres de carne y hueso.

Por consiguiente, la Paz Histórica no puede ser otra sino aquella que surja de los procesos de movilización y lucha social que se promueven desde los movimientos y organizaciones sociales y populares fundados en una clara acción colectiva en la que se evidencie la apropiación de la ciudadanía, de manera que sean ciudadanos políticos que no deleguen el poder, sino que se lo tomen para sí, asumiendo su responsabilidad en la toma de decisiones y en los asuntos públicos, ahí estará la esencia de la praxis política para avanzar hacia la materialización de la Paz Histórica. En relación con lo anterior, se requiere pensarse el concepto de paz a partir de las particularidades de la realidad concreta, es decir, del contexto colombiano, sin caer en reduccionismos armónicos de los conflictos, dando respuesta a la violencia directa, cultural, estructural y política, pues como manifiesta Clausewitz (2002) la guerra debe examinarse en el escenario concreto de las relaciones sociales, de sus expresiones políticas, económicas, sociales y culturales.

De modo que, para que realmente se trascienda de la paz formal a la paz real, es decir a la Paz Histórica, es menester que se lleve a cabo una transformación social, política, económica y jurídica en el país, para así posibilitar la transformación de las realidades injustas, indignas y violentas, constituyéndose en garantía para la materialización de la justicia social, la dignidad y la libertad. La paz histórica no se genera en un escenario democrático abstracto, sino en el marco de procesos históricos, situados en la realidad concreta como tal, por medio de la participación democrática de los sujetos sociales en la construcción del poder político, lo implica brindar condiciones reales de participación popular (García, 2013).

En consecuencia, la paz histórica se cristaliza en la medida en que se cuente con una democracia que no esté al servicio del mercado o de los dueños del capital, que propicie escenarios de acción política, promueva incansablemente la igualdad política, para que los individuos se apropien de la ciudadanía, por ende, del poder del Estado y de ese modo, la toma de decisiones no sea un aspecto a cargo de un sector privilegiado de la sociedad. Como sostiene García (2013), la democracia no puede ser precaria y vacía, debe garantizar la organización política para la efectiva participación de los individuos en la toma de decisiones y en la conducción política del Estado... promover cambios profundos con el fin de orientar la construcción de una sociedad digna y justa, que promueva el acceso a los derechos sociales, la garantía de la justicia social, debe garantizar la distribución del ingreso entre las diversas clases sociales, por supuesto que existe una estrecha relación entre la democracia participativa y la paz histórica.

Este tipo de paz es la que conlleva a la expansión de las libertades fundamentales, dando respuesta a los problemas estructurales que han detonado en un conflicto armado de más de sesenta años en Colombia. De esa manera el concepto de paz se verá objetivado y la sociedad logrará construir hechos históricos de convivencia real. La paz aparece como concepto abstracto e intangible si no garantiza al conjunto de la sociedad el acceso a derechos, a la dignidad humana, a la justicia social y si no resuelve los problemas históricos que han generado el conflicto, la pobreza, desigualdad, exclusión social, y eso implica transformación del modelo económico.

A partir de los resultados obtenidos con el análisis de la información cualitativa y cuantitativa en el marco de la investigación se logra inferir que la materialización de la paz real en la sociedad colombiana, por ende, en la sociedad nariñense debe estar acompañada de una democracia participativa, dignidad humana, justicia social, garantía y acceso a derechos, pluralidad, presencia integral del Estado en los territorios. Por consiguiente, la construcción de la paz implica hacer partícipes a los diversos sectores sociales en su configuración, pero también requiere de voluntad política no solo del Estado, sino además de los sectores económicos que se han beneficiado de la guerra, por lo tanto, mientras no se dé respuesta a la esencia del conflicto armado, las confrontaciones, luchas armadas, la violencia política seguirán estando ahí, así se tenga de por medio un Acuerdo de Paz.

V. Conclusiones

Comprender las vicisitudes que ha alcanzado en conflicto armado en el departamento de Nariño, posibilita dimensionar lo macabro que puede llegar a ser la guerra. Se está ante una región que se desangra constantemente, donde la violencia ha alcanzado aspectos tan críticos como la deshumanización, pese a ello el Estado colombiano continúa haciéndose el de la vista gorda, incumpliendo y desmoronando el Acuerdo de Paz.

Mientras las familias campesinas del departamento de Nariño y por ende de Colombia, no cuenten con los recursos para mantener a sus familias, se carezca de carreteras, mientras no se tenga acceso a la salud, educación, los cultivos ilícitos seguirán siendo la opción obligada que va a tener esta población para buscar satisfacer sus necesidades básicas ante el abandono estatal que sigue estando plasmado como una imagen luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Se continúa reduciendo la presencia estatal a la presencia militar, sin que exista inversión social, sin que el Estado llegue a esas regiones dejadas por la extinta guerrilla de las FARC-EP, hecho que ha posibilitado que el dominio del territorio en el departamento de Nariño, así como en otras regiones del país ha sido tomado por una multiplicidad de estructuras armadas; en ese sentido, mientras el Estado no esté presente en los territorios, no únicamente a través de las fuerzas militares, sino más bien por medio de la inversión social, de la implementación de políticas sociales, programas de educación, garantía de los derechos sociales, los grupos armados continuarán siendo los principales “amo y señores” de estos territorios y la paz quedará reducida a una simple fase vacía que todos se toman la tarea de repetir, extrayéndole su sentido y significado real e histórico.

En consecuencia, se necesita construir una paz real, no solamente en el departamento de Nariño, sino en toda Colombia, que supere de manera trascendental la paz formal e incluso, la misma paz burguesa, una paz que atienda los problemas estructurales, lo que el conflicto armado se ha encargado de agudizar en el país. Las condiciones de guerra y violencia que enfrenta el departamento de Nariño son las que llaman a la construcción de una Paz Histórica, capaz de trascender la paz subjetiva, dando respuestas profundas a los problemas históricos, que seguirán estando ahí mientras no se generen transformaciones en los ámbitos económico, político, jurídico, social, también cultural, e incluso, mientras no se reconceptualice el concepto de paz.

Los resultados de la investigación son un aporte para identificar que la paz debe construirse desde las necesidades colectivas de los sujetos sociales, pero debe ser una paz real, en tanto, debe comenzar por darse respuesta a los problemas históricos que han provocado el conflicto armado y adicional a ello, reconceptualizar el concepto desde los aportes de los diversos sectores sociales.

VI. Referencias Bibliográficas

- Clausewitz, K. (2002). De la guerra. In De la Guerra (Librodot).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Censo Nacional de población y vivienda 2018. Recuperado de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>.
- Elias, N. (1981). Civilización y Violencia. *Asthetik Und Kommunikation*, 141–151.
- Estrada, J. (Ed.) (2021). La “Paz con legalidad” al desnudo: simulación de la implementación y trizas del Acuerdo de paz con las FARC-EP. Bogotá, Colombia: DGP Editores S.A.S.
- Franco, F. (2001). Gastón Bouthoul. La guerra como función social. En Ideas sobre prevención de conflictos (pp. 56-91). Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ). (2020). Situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Nariño. Informe anual 2020. Recuperado de: https://www.fundepaz.org/wpcontent/uploads/2021/03/Informe_Anuar_2020_DDHH_Nariño.pdf.

- García, A. (2013). *Dialéctica de la democracia*. Ediciones desde abajo
- Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. *Espacio Crítico*.
- Instituto Kroc. (2021). Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia: logros, desafíos y oportunidades para aumentar los niveles de implementación. Recuperado de: <https://curate.nd.edu/downloads/und:6108v982w96>.
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (2021). Informe de masacres en Colombia durante el 2020-2021. Recuperado de: <http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (2021). 5 años del Acuerdo de Paz-balance en cifra de la violencia en los territorios. Recuperado de: <https://indepaz.org.co/5-anos-del-acuerdo-de-paz-balance-en-cifras-de-la-violencia-en-los-territorios/>.
- Jiménez, C., Zuluaga, J. (2021). Incertidumbres de la paz: entre el incumplimiento del Acuerdo y las luchas sociales en su defensa. *CLACSO*.
- Molano, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). *Espacio Crítico*.
- Muñoz, F., y López, M. (2004). Historia de la Paz. *Dialnet*, 43–66.
- Nievas, F. (2009). Sociología de la guerra. *Redes.Com*, 25–48.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2021). Informe Mundial sobre las drogas 2020. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Colombia_2020_Coca_Survey_FactSheet_ExSum.pdf
- Pécaut, D. (2012). *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*. Fondo Editorial Universidad EAFIT.
- Salas, L., Wolff, J. y Camelo, F. (2018). Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Estudio de caso: municipio de Tumaco, Nariño. CAPAZ. <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2018/11/Capaz-7-baja.pdf>.
- Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. (2021). Reporte Víctimas del Conflicto Armado. Recuperado de <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos>